



OFICIO

S/REF.: Expediente nº **00001-00084131**

FECHA: 18 de diciembre de 2023

ASUNTO: Manifestaciones Ferraz.

DESTINATARIO: [REDACTED]

El día 22 de noviembre de 2023 tuvo entrada en esta Dirección General solicitud de información efectuada por [REDACTED] a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

“Me gustaría saber el coste desde el 3 de noviembre hasta el día en que se conteste esta petición del dispositivo policial situado en la calle Ferraz de Madrid para proteger la sede central del PSOE. ¿Cuántos agentes han sido movilizados? ¿Cuántos eran policías infiltrados entre los manifestantes? ¿Cuántos botes lacrimógenos han sido empleados? ¿Cuántas pelotas de goma han sido disparadas? ¿Cuántos detenidos ha habido? Todo esto también desglosado por días.

¿Ha sido algún policía expedientado por actitudes improcedentes? De ser así, ¿cuántos?”

Una vez analizada la petición, este Centro Directivo ha resuelto conceder el **acceso parcial** a la información solicitada, conforme al artículo 16 de la LTAIPBG, que reseña: *“En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida”*.

En lo que relativo al **número de efectivos que han participado en los distintos dispositivos, bien de paisano o de uniforme**, significar que, una vez analizada la petición se considera de aplicación la **limitación del derecho de acceso** regulado en el **Artículo 14.1 d)**, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para ... la seguridad pública”.

Los motivos de la denegación a la información solicitada se fundamentan en que la gestión de los recursos humanos disponibles constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales cuya divulgación supone mostrar posibles vulnerabilidades operativas que puedan existir.

Resulta evidente que el conocimiento del número concreto de funcionarios que participan en este tipo de operativos favorece la posibilidad de analizar el grado de seguridad de los mismos, lo que pone en peligro su eficacia y compromete la seguridad de los propios participantes.

Respecto al **coste económico** de los dispositivos de seguridad no es posible cuantificarlo de forma concreta, ya que el desarrollo del servicio operativo de seguridad y protección que se derivó fue desempeñado por funcionarios que ejercieron dichas funciones dentro de su actividad general, conforme a los turnos establecidos en sus respectivos servicios ordinarios, percibiendo las retribuciones que les corresponden por el ejercicio de sus funciones habituales.

Todas las cuestiones particulares planteadas relativas al **material antidisturbios utilizado y al número de detenido**, forman parte de procedimientos judiciales, siendo de aplicación el **punto dos de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG**, según el cual *“se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”*.

La información solicitada forma parte de un **atestado policial** el cual es remitido en su conjunto a la Autoridad Judicial competente, formando parte a su vez de actuaciones judiciales sobre las que el Ministerio del Interior no puede disponer, sino que quien desee acceder a ella debe someterse al régimen contenido en las normas que regulan el modo y condiciones de acceso a la información contenida en las actuaciones judiciales, cuya aplicación prevalece sobre cualquier otra norma, en este caso la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Cabe reseñar que los **atestados policiales** no son meros informes o anexos que se adjuntan a la causa judicial, sino que pueden tener también la **virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables**, que expuestos por los agentes con su firma y rúbrica y con las demás formalidades exigidas por los arts. 292 y 293 LECrim han de ser calificados como declaraciones testificales, siendo la esencia de la instrucción de procedimiento penal, la cual continente denuncias, objetos de prueba, pruebas anticipadas e indicios conformadores en su momento de auténticas pruebas y por lo tanto no es un documento que deba ser catalogado como público, y mucho menos cuando este es remitido a la Autoridad Judicial, que es la competente para el total esclarecimientos de los hechos y quien igualmente determina el secreto o no de las actuaciones.

Así, la **Sentencia nº 61/2020, dictada por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 11, procedimiento ordinario 116/2019**, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo promovido contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –CTBG- de 30/07/2019, con referencia R/0308/2019, sostiene que los atestados policiales pierden la naturaleza puramente administrativa que podría tener un informe elaborado en un Ministerio, pues al formar parte de las actuaciones judiciales cuya comisión se investiga y, eventualmente se enjuicia, pasan a formar parte del expediente judicial y, por ello, **la autoridad competente para otorgar o no el acceso a los mismos es la judicial**, por cuanto constituyen parte de la documental obrante en el procedimiento, al igual que un informe pericial, o cualquier otro documento.

Por último, señalar que es la **autoridad judicial competente** quien evaluará las actuaciones policiales en cada caso, es por lo que, si de los hechos descritos en los atestados policiales se desprendiera alguna **conducta que pudiera ser tipificada como falta en el régimen disciplinario** de la Policía Nacional, **o como delito** en el Código Penal, daría lugar a la incoación inmediata del correspondiente expediente disciplinario del agente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA



Francisco Pardo Piqueras